Proyecto Internacional de Derechos Humanos - Londres

Boletín No. 223

1-15 Diciembre 2009

Este boletín es editado quincenalmente y es distribuido gratis por correo electrónico.

Subscripciones: hrr_project@hotmail.com - Nuestros sitios Web son www.memoriaviva.com y www.ecomemoria.com

Martes 1 de diciembre de 2009 La Nación

Detenidos los 12 procesados por torturas en la Esmeralda

Los 12 oficiales en retiro de la Armada y Carabineros que ayer fueron procesados por la jueza Eliana Quezada por el delito de secuestro y tortura contra ex presos políticos tras el golpe de Estado de 1973 en el buque escuela Esmeralda, fueron arrestados esta mañana por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, encabezados por el comisario Sandro Gaete.

Los encausados son los vicealmirantes Juan Mackay Barriga y Sergio Barra von Kretschmann, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, el coronel de Carabineros Nelson López Cofré. Además fueron procesados los suboficiales de la Armada Bertolino Castillo Soto, Jorge Leiva Cordero, Jaime Lazo Pérez, Reginaldo Rebolledo López, Manuel Leiva Valdivieso, Juan Reyes Bausar, Luis Cabezón Cattanzano y Alejo Esparza Martínez.

Todos fueron llevados al cuartel de la PDI de Viña del Mar, para luego, a eso de las 11:30, ser derivados a los tribunales de Valparaíso para comparecer ante la ministra en visita.

La jueza deberá disponer a que recinto naval y de Carabineros serán ingresados los acusados.

La resolución fue dictada por el arresto ilegal y tormentos de María Eliana Comeném, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno Cortés, María y Rosa Huerta Sánchez, y María Isabel Vásquez Pezoa

Martes 1 de diciembre de 2009 La Nación

Armada suspendió acto en la Esmeralda por arrestos

La comandancia en jefe de la Armada resolvió suspender este martes la ceremonia de inauguración de la Regata Bicentenario que se realizaría a las 19.00 horas a bordo del buque Escuela Esmeralda en el molo de abrigo en Valparaíso.

Al acto estaban invitados los embajadores de 13 países que participarán en la regata, el ministro de Defensa Francisco Vidal y otras autoridades locales y nacionales.

Fuentes altamente informadas confirmaron a lanacion.cl que el motivo de la sorpresiva suspensión fue la detención hoy por la mañana a cargo de funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, de dos vicealmirantes, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, todos en situación de retiro, los que fueron procesados ayer por la jueza Eliana Quezada acusados como autores de secuestro y torturas practicadas a prisioneros políticos precisamente a bordo de la Esmeralda en los días posteriores al golpe de Estado de 1973. En la decisión de suspender la ceremonia fue considerada además la cierta posibilidad de que manifestantes concurrieran al molo de abrigo a protestar en contra de la ceremonia, informando a los invitados de los crímenes cometidos en el buque escuela que operó como centro de detención.

A bordo de la Esmeralda murió el 21 de septiembre de 1973 el sacerdote Miguel Woodward, causa que también instruye la ministra Quezada y en la que ya existe cerca de una veintena de oficiales y suboficiales (R) de la Armada procesados.

Entre los ex prisioneros torturados en la Esmeralda está el dirigente comunista, doctor Alberto Neumann, y la ex militante del Mapu María Eliana Comeném. Ellos son dos de las víctimas por

las cuales la jueza Quezada procesó ayer a los 10 marinos y a un oficial y un suboficial de Carabineros.

Varios de los procesados también operaban como torturadores e interrogadores bajo tormentos en la Academia de Guerra Naval en el cerro Playa Ancha del puerto. Entre ellos están los dos vicealmirantes (R) Sergio Barra von Kretschmann y Juan Mackay Barriga, y el capitán de navío (R) Ricardo Riesco Cornejo. Los tres están igualmente procesados por la jueza por el secuestro y desaparición de Miguel Woodward.

La magistrada investiga además otras querellas por torturas a bordo de la Esmeralda y la Academia de Guerra, como también en el Cuartel de Orden y Seguridad Silva Palma y el Fuerte Miller de la Infantería de Marina en Viña del Mar frente al balneario Las Salinas.

En estos dos últimos lugares, además de la base naval de Talcahuano, fueron torturados durante varios días antes del golpe de Estado cerca de cien marineros constitucionalistas apresados por oponerse a la asonada militar que se preparaba para derrocar al Presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular

Miércoles 2 de diciembre de 2009 Radio Universidad de Chile
Realizan excavaciones en búsqueda del cuerpo del sacerdote Woodward

Desde el lunes se llevan a cabo pericias por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para buscar los restos del sacerdote inglés Miguel Woodward, detenido desaparecido en los primeros días del golpe militar, y muerto a bordo del buque escuela Esmeralda.

Las excavaciones se están realizando en la zona norte del cementerio número tres de Playa Ancha, donde la Armada de Chile enterró clandestinamente los cuerpos de los primeros detenidos y ejecutados políticos.

“Los cuerpos eran tirados sin ataúd, desnudos e incluso con un cartón en la cara que les tapaba, a la fosa común. Los cadáveres eran colocados uno al lado del otro y luego se tapaban con un poco de tierra, lo que se hacía por si días después aparecía algún familiar para efectos de su individualización, como también para evitar que se los comieran los perros que acudían ahí como manadas de lobos”, relató el cuñado del sacerdote Woodward, Fred Bennets.

Hace unos dos años se realizaron pericias similares por parte de Investigaciones, sin resultados. El hecho que allí se enterraran cuerpos en funerales y la remoción de tierras por obras públicas en la misma zona del cementerio, podrían ser factores que impidieran la recuperación del cuerpo de Woodward y de otros detenidos desaparecidos. Es por ello que Patricia Woodward, su hermana, reconoce pocas esperanzas para recuperar su cuerpo.

“No estoy muy segura que vamos a encontrar a mi hermano, pero si quedaría muy contenta que aparecieran muchos desaparecidos, porque podrían haber muchos en este sitio”, afirmó la hermana del sacerdote.

De todas maneras, se espera que pueda haber novedades, ya que las pericias en el cementerio de Playa Ancha se deberán extender por algún tiempo.

La causa está a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Eliana Quezada, quien también lleva el juicio por siete secuestros ocurridos a bordo de este buque en los inicios de la

dictadura, y por el que ayer dictó doce procesamientos de ex uniformados y también de un ex oficial de Carabineros

Jueves 3 de diciembre de 2009 El Mostrador

La histórica identificación correcta de víctimas del Patio 29

El ministro Alejandro Solís comunicó el miércoles último a los familiares de tres víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet las identidades correctas de las mismas, luego que más de un centenar fueron mal identificadas por el Servicio Médico Legal, según se conoció en el año 2006.

Se trata de personas asesinadas en 1973 y lanzadas a tumbas marcadas como “NN” en el patio 29 del Cementerio General, de donde fueron exhumadas tras el restablecimiento de la democracia en el país.

Solís se reunió con los familiares de las tres primeras víctimas identificadas y con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Los restos corresponden a los detenidos desaparecidos Waldemar Segundo Monsalve Toledo, Pablo Aranda Schmied y al ejecutado político Nelson Muñoz Torres.

Las pericias para establecer sus identidades fueron realizadas por el Health Science Center de la Universidad de North Texas (EE.UU.), que confirmó que las muestras de ADN de los familiares eran compatibles con las víctimas, dijeron las fuentes. En tanto, la delegada presidencial en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, afirmó que la identificación de los tres primeros cuerpos del Patio 29 “es el comienzo del fin” del calvario de sus familias.

“Este es el comienzo del fin, a medida que el ministro vaya recibiendo los informes. Creo que ya la próxima semana puede recibir otros pocos”, apostilló Sepúlveda.

En el año 2006 se dio a conocer que había errores en la identificación de los restos del Patio 29 y desde entonces el Servicio Médico Legal comenzó una serie de auditorías para lograr identificar correctamente a las víctimas.

El juez Solís, quien estuvo acompañado por el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, explicó a los familiares que la identificación se realizó mediante los análisis de ADN mitocondrial y ADN Nuclear ATR, encargados en mayo de 2008 para un total de 123 osamentas exhumadas desde el Patio 29.

Los análisis se realizaron luego de una auditoría científica realizada en la Unidad de Genética del Servicio Médico Legal y de la designación, en marzo de 2007, de un Panel de Expertos integrado por los médicos forenses María Cristina de Mendoza y Francisco Etxeberria y la genetista Rhonda Raby.

La historia de las víctimas

Según el informe Rettig, que en 1991 certificó unos 2.279 casos de muertos a manos de agentes del Estado, Waldemar Segundo Monsalve Toledo fue detenido el 12 de octubre de 1973 en las cercanías de la empresa donde trabajaba y desde esa fecha se desconocía su paradero.

En tanto, Pablo Aranda Schmied fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en el Hospital San Juan de Dios, donde realizaba una práctica como alumno de tercer año de Medicina y desde esa fecha también se desconocía su paradero.

Nelson Muñoz Torres, por su parte, era un lustrabotas de 20 años que fue hallado muerto en una calle de Santiago, a causa de múltiples heridas de bala, el 23 de septiembre de 1973.

Cuando en 1991 se abrieron las tumbas sin nombres del Patio 29 se descubrió que en algunas había hasta tres cuerpos en un mismo

ataúd. Al ser consultado sobre ello Augusto Pinochet, cuando aún era comandante en jefe del Ejército, comentó: “¡Pero qué economía más grande!”

En julio de 2006 el Patio 29 fue declarado Monumento Nacional

Viernes 4 de diciembre de 2009 El Mostrador

El fantasma del Caso Frei les pena a los jueces de la Suprema

El sábado de la semana pasada el ministro Alejandro Madrid, quien sustancia el proceso por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, realizó una diligencia en la Clínica Santa María, donde en 1982 murió el ex mandatario. Esta fue solicitada en marzo de este año por el abogado querellante de la familia, Álvaro Varela.

La pesquisa, que buscó “fijar” el lugar en imágenes, provocó más de algún comentario entre los ministros de la Corte Suprema, debido a que se realizó a sólo quince días de las elecciones presidenciales en la que participa el hijo del fallecido estadista. Lo anterior, debido a que circulan fuerte rumores que indican que Madrid daría un golpe en cualquier momento.

Y es que el tema de la imagen institucional, señaló un alto magistrado, podría verse mellada por una suerte de interpretación de favoritismo hacia el abanderado oficialista, si es que Madrid decide someter a proceso a alguno de los médicos que participó en la operación a Frei padre o bien sobresea la causa sin responsables. Todos los escenarios, en cualquier caso, abren complicaciones de carácter político.

Según supo El Mostrador, entre los supremos se han hecho comentarios de pasillo respecto a la falta de prudencia de Madrid, aunque reconocen al mismo tiempo que la independencia de los jueces es una facultad que no está en cuestión

El tema no es menor tomando en cuenta que muchas veces Frei ha aludido a la muerte de su padre en medio de la campaña. De allí que algunos esperan que Madrid dilate la decisión hasta después de la segunda vuelta, como una manera prudente de tomar distancia del proceso electoral.

Básicamente, el análisis apunta a la independencia que ha tomado el Poder Judicial de los temas políticos durante al menos los últimos tres años, fecha en la que partió la implementación de un diseño comunicacional que ha buscado cambiar la alicaída imagen de los jueces, y que logró que en 2009 la Justicia fuera percibida como una de las instituciones con mayor transparencia.

Lo heterónimo

A la complicación Suprema se suma la frase poco feliz que pronunció el senador Frei hace algunas semanas, relativa a la “puerta giratoria” que favorece a los delincuentes, apuntando a la responsabilidad de los tribunales en materia de seguridad ciudadana. El hecho provocó tal nivel de molestia entre los altos magistrados, que el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, lo calificó como “desconocimiento” del sistema. Juica, al mismo tiempo, usó la frase “mala fe”, más propia del lenguaje político, pero que en el ámbito judicial está casi vedada por la misma razón.

Supremos consultados por este diario, explicaron que en su oportunidad las afirmaciones de Frei cayeron como un balde agua fría, en el entendido que el número de prisiones preventivas que se dictan y el endurecimiento de las penas ha ido en aumento, colocando a Chile como el país con uno de los más altos índices de detenidos en las cárceles, en comparación con otras naciones de la región.

Tal fue el revuelo que causaron los dichos del candidato oficialista, que el abogado Juan Pablo Hermosilla, vocero de Océanos Azules en temas de seguridad pública, debió dar explicaciones públicas de lo ocurrido con el objeto de matizar el error comunicacional de Frei.

Ya es tradición que los abanderados presidenciales durante la campaña se reúnan con los supremos con el fin de dar a conocer sus propuestas en materia de Justicia. Pero debido al entredicho, este año Frei decidió no concurrir, lo que generó más de algún comentario. Y es que los jueces tienen aspiraciones para mejorar el sistema, pero los recursos son escasos, toda vez que no tienen un presupuesto propio y deben recurrir a Hacienda para las eventualidades que surgen cada año.

El premio

Durante el último tiempo, la Corte Suprema ha buscado hacer valer su autonomía como tercer poder Estado, pero no como un actor político que busca influir y construir poder. A partir de esta premisa, la posibilidad de que Madrid tome alguna decisión a días de las elecciones les provoca a los supremos más de una complicación.

Hasta ahora no han “habido recomendaciones ni mucho menos al ministro Madrid. No nos corresponde adentrarnos en el fuero interno de un juez que sustancia una causa criminal tan importante para el país”, confidenció un supremo consultado por este diario. La frase del alto magistrado apunta a la “prudencia”, una de las cuatro virtudes cardinales que guían el actuar de los jueces cuya estatua se encuentra en la nave central del palacio de tribunales junto a las otras tres: justicia, fortaleza y templanza.

En todo caso, más allá de los comentarios de pasillo, Madrid ha mantenido una conducta lineal en sus decisiones y es merecedor -entre los periodistas que cubren el sector tribunales- del premio “Adolfo Bañados”, el supremo que sustanció el caso Letelier a principios de los 90.

Bañados solía decir cuando era inquirido sobre las alternativas del caso por la prensa: “Se verá al final”. Madrid, por su parte, usa un discurso hermenéutico para negar aspectos del caso, pero sin nunca confirmar ni descartar nada.

Entre los abogados ligados a la causa suele comentarse que Madrid tiene la paciencia de un hombre de 5 mil años, ya que sus decisiones las toma con la más absoluta convicción, no importa a quién favorezca o afecte.

El magistrado, quien dejó el cigarrillo hace algunos años, es un funcionario judicial respetado y bien evaluado por los supremos y un paciente y fino investigador. Tanto es así que fue él quien encontró la autopsia de Frei Montalva, escondida por más de 20 años bajo el rótulo de NN, en el hospital de la Universidad Católica. También descubrió la existencia del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército que funcionaba en calle Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial. En ese lugar se prepararon venenos como la toxina botulínica, sustancia con la que se sospecha pudo haber provocado la muerte del ex mandatario.

Asimismo, Madrid realizó una diligencia en el Cementerio General a fines de diciembre de 2005, cuando desenterró los restos del ex Presidente para someterlos a distintos peritajes. Junto a todo lo anterior, la capacidad de trabajo de Madrid es un elemento que destaca en los pasillos de tribunales. Además del caso Frei ha sustanciado el proceso por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos y el asesinato del ex diplomático español Carmelo Soria. Ambas causas sólo esperan la sentencia de primera instancia para los militares involucrados. También tramita el homicidio del agente de la DINA Manuel Jesús Leyton y el envenenamiento de miristas en la cárcel pública a fines de 1981 por botulismo.

Por ahora, todo parece indicar que Madrid podría dictar la próxima semana una decisión, aunque los supremos consultados

apuestan que la prudencia guíe sus pasos y así evitar una arremetida de la derecha, que podría acusarlos públicamente de intervencionismo electoral

Domingo 6 de diciembre de 2009 La Nación

Víctor Jara vuelve a la tierra

“Chacales asesinos, fracasaron; chacales asesinos, él está en la historia; chacales asesinos, no lograron matarlo; chacales asesinos, está él en el pueblo; chacales asesinos, los desprecio”, recita el Tío Valentín, sacándose lo de tío y quedando en don Valentín Trujillo. El pianista es uno de los tantos que peregrinó hacia el Galpón Víctor Jara durante los días que el recinto de Plaza Brasil se transformó en la penúltima morada de Víctor Jara. Porque la última, como siempre estuvo en la voluntad de Jara, era la tierra.

Víctor Jara pasó 36 años en un nicho del Cementerio General. En altura, en el único rincón que Joan Turner le pudo destinar cuando sus restos todavía eran canto clandestino. Hasta 2003, recuerda el músico Jorge Coulon, la sonrisa de Jara estaba tácitamente vetada para la televisión. “Hay una generación a la que se le negó la figura de Víctor Jara”, dice el Inti Illimani. Y había señales de que la situación no era mucho más favorable: en mayo, el ministro en visita del caso, Juan Eduardo Fuentes, anunció el cierre del sumario por el homicidio; a finales de julio, la Municipalidad de Santiago desalojó el Galpón Víctor Jara por la fuerza y declaró el Estadio Víctor Jara como “impedido” para realizar eventos masivos. Pero cuatro meses después, el escenario es el contrario: Víctor Jara tuvo su funeral y con él, el ungimiento tardío para una de las figuras centrales de la creación popular nacional. Miles de personas circularon por un velorio de 46 horas en el Galpón. “Parecen los ochenta”, decía divertido el músico Pedro Fonca, fundador de De Kuruza, uno de los tantos deudos que se acercó y le dijo “gracias, campeón de todos los tiempos”.

El viernes en la mañana llegó la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada de la ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá. Sobre los adoquines de Huérfanos, la Presidenta lo despidió: “Nos hemos demorado 36 años. Finalmente, puede descansar en paz. Pero hay muchas otras familias. Tenemos que seguir luchando para que Chile pueda descansar. Víctor Jara, presente”. De clausuras y presiones de olvido, en cuatro meses Jara pasó a recibir la visita del Ejecutivo y los gritos de victoria en las calles. Pero se trata de un proceso de años.

Lleno de banderas

“Es cierto: resulta duro, a veces indignante, pensar que hay que estar luchando por la memoria de Víctor. Tenemos que ser capaces de seguir con el legado, y eso nos da mucha fuerza. Somos porfiados”, explica la directora de la Fundación Víctor Jara, Gloria König. “Y deberíamos destacar un asunto generacional. Son los jóvenes de hoy quienes están recuperando esa memoria, que se identifican con su consecuencia”. Ayer sábado, la gente salió a la calle a juntar potencia, unidos en la romería más grande que se haya visto en Santiago dedicada a un músico nacional. Al vuelo, más de 10 mil personas ocuparon el tramo entre la Plaza Brasil y el Cementerio General, desembocando en una multitud que ocupó desde la entrada del camposanto hasta la calle Santos Dumont.

Banderas del Partido y de las Juventudes Comunistas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, diabladas, una banda de rock sobre un Kia Frontier, heladeros, políticos, Mauricio Redolés con su parka bajo el brazo, el actor José Soza saludando a las señoras, un niño con su padre encaramado en una bicicleta tipo Da Vinci. Gente pintada de azul, blanco y rojo, tirando carretones de los mismos colores, formando una bandera chilena. Los edificios

de Avenida La Paz con banderas, manguereando a la multitud. Y al frente de la romería, la carroza del Hogar de Cristo que llevaba a Víctor Jara a su última morada, secundada por Amanda y Manuela, sus hijas; Joan, su compañera.

Joan Jara habló el viernes. “Este no es un funeral normal”, expresó. “Es un acto de amor y duelo por todos nuestros muertos. Me cuesta mucho hablar, porque es demasiado emocionante. Y es verdad, Víctor vive entre nosotros”. La memoria seguirá viva: el sueño de la fundación que preside Joan es que el Estadio Víctor Jara sea transformado “en un gran centro de la cultura chilena”. Según cuenta Gloria König, “ese es el próximo desafío. Se lo hemos planteado a la Presidenta. Queremos que sea el estadio para la cultura popular chilena”.

Hoy puede ser mañana

La procesión del sábado pasó por un mural que la Brigada Ramona Parra emplazó en Avenida La Paz, hermano de otro que pintaron en el Galpón, todos basados en el retrato sonriente que tomó el fotógrafo Antonio Larrea, quien trabajó con el músico para el arte de sus discos. El sábado capturaba el adiós desde una ventana de gato que asomaba desde la Pérgola de Recoleta.

“Estoy cerrando un ciclo personal. Esa foto con que se hace el mural, era para la portada del disco que quedó inconcluso, que luego salió con el nombre de ‘Manifiesto’. Yo estaba produciendo la carátula cuando vino el golpe”.

Joan Manuel Serrat también recuerda lo que quedó pendiente: “Su profunda identificación con el pueblo fue casi mística. (...) Vivió con ellos, se hizo piel y sangre de para, desde el hombre provinciano, alcanzar lo universal y de forma irrevocable, con profundas convicciones, asumir su condición de artista comprometido. Así fue hasta que acallaron brutalmente su voz el 16 de septiembre de 1973 y algo quedó truncado para siempre”, escribió el catalán en el diario El País de España.

Y hablando de cabos sueltos, Jara tenía un deseo postergado. Lo cierto es que el cantante no estaba cómodo en un nicho. Quería estar en el suelo. “Ahí debajo de la tierra / no estás dormido, hermano compañero. / Tu corazón oye brotar la primavera”, escribió en “El alma llena de banderas”. “Joan siempre lo había dicho”, recuerda Gloria König, “pero nunca lo habría cambiado porque sentía que ese era el lugar en que había quedado. Con la exhumación, tuvo que salir de ahí. Está el regreso a la tierra, pero lo otro, que también es súper importante, es que ella quiere estar con él”.

Y fue en el mismo ataúd en que fue depositado en 1973, hoy restaurado por su hija Manuela, conservando algunos arañazos del tiempo, recordatorio de las heridas abiertas. Y bajo el mismo poncho negro de tramas rojo copihue que le regaló Angelita Huenumán, la de la canción del mismo nombre, a quien Víctor agradeció con uno de esos retratos que dedicaba a los desconocidos con calles de tierra, casas de cartón, los que comen tierra con gusanos o que no pitan. “En tus telares, Angelita, / hay tiempo, lágrima y sudor / están las manos ignoradas / de éste, mi pueblo creador”, cantó. Bajo tierra se van las manos ignoradas y acá arriba quedan las manos abiertas

Cuentas pendientes

El 14 de mayo, el juez Juan Eduardo Fuentes decretó el cierre del sumario en el caso Víctor Jara y sólo identificó como responsable al oficial en retiro del Ejército Mario Manríquez Bravo. El cierre fracasó y arrancó una nueva fase, destinada a vincular otros hechos sucedidos en el ex Estadio Chile para tratar de reconstruir nombre a nombre el cuadro de oficiales y subalternos del recinto de detención.

El 4 de junio, el cuerpo de Víctor Jara es exhumado del nicho del Cementerio General donde había sido depositado en 1973. El director legal del Servicio Médico Legal entregó el informe sobre las pericias cinco meses después al juez Juan Fuentes Belmar: la causa de muerte de Jara fueron “múltiples heridas traumáticas por bala en el cráneo, tórax, abdomen, piernas y brazo. Se constataron fracturas en el cráneo y tronco”. La primera autopsia, la de 1973, había sido superficial. Ahora se logró acreditar que el cuerpo pertenecía, efectivamente, al cantautor de “El cigarrito”.

El o los autores del crimen siguen impunes. El único procesado hasta el momento es el ex concripto José Paredes Márquez. Y la sombra inasible de “El Príncipe” sigue penando el proceso: quienes compartieron días con Víctor Jara en el Estadio Chile han coincidido en un oficial de rasgos germanos, responsable de maltratos, saña y disparo contra el músico. El Ejército argumenta que no existen registros de los oficiales que tomaron posición en el centro. El magistrado Fuentes Belmar sigue adelante con la investigación para encontrar a los responsables

Lunes 7 de Diciembre de 2009 La Nación

Recluidos los 6 procesados en crimen de Frei Montalva

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente.

Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Guitérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejército en retiro y actualmente ejerce como jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la Dina, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la Dina, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei
El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.
“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo. Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”. Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.

Miércoles 9 de diciembre de 2009 La Nación **El círculo de la muerte alrededor de Frei Montalva**

El dramático mensaje “¡Sáquenme de aquí inmediatamente!” que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva escribió a su familia ya con pocas fuerzas, tenía explicación. Entre la somnolencia de su gravedad, cuando los tóxicos inyectados hacían efecto, Frei se daba cuenta de lo que ahora la investigación judicial del juez Alejandro Madrid estableció como verdad jurídica.

El entorno que entonces rodeó al ex Mandatario fue siniestro, plagado de médicos militares, agentes de los servicios de Inteligencia de la dictadura, y otros que gozaban de su amistad y cercanía que lo traicionaron. No todos están aún en la lista de los seis procesados el lunes por el magistrado.

El curso de la indagatoria judicial y policial da cuenta de confabulaciones en distintos ámbitos para favorecer el asesinato y limpiar las huellas. Ello condujo incluso a que el mismo juez dudara fuertemente en un comienzo de que a Frei lo habían eliminado porque constituía un peligro para el régimen dictatorial. En los inicios de la investigación, a inicio de la década del 2000, la tesis de la muerte debido a complicaciones clínicas era la que marcaba el caso, y el crimen aparecía lejano.

Sin embargo, las negligencias médicas y pérdidas de documentos que ahora se establecen dolosas y que antes se apreciaban normales producto del apuro y la urgencia ante la gravedad del enfermo, o del paso del tiempo, constituyeron elementos vitales para que la investigación se fuera enrieland por el camino del homicidio.

La enfermera María Victoria Larraechea Bolívar, profesional residente en 1981 en la Clínica Santa María y hermana de Marta, esposa del candidato presidencial de la Concertación, relata en el proceso algunos hechos que develan aquellas negligencias. El 8 de diciembre de 1981, día en que tras la primera reoperación Frei entró en estado de shock séptico agudo, los médicos dirigidos por el procesado doctor militar Patricio Silva Garín “se resistían aún a llevarlo a la UTI porque no querían asumir la gravedad” del ex Mandatario.

Cuenta que en la habitación 401 la mandaron a buscar material esterilizado para ponerle un catéter, lo que realizaron a medias porque “uno de ellos puso su chaqueta encima del material esterilizado” contaminando la pureza de los implementos. Dice que recién entonces optaron por llevarlo por primera vez a la UTI en el segundo piso. Pero el catéter “quedó abierto y al llegar a la UTI ya había perdido gran cantidad de sangre” lo que se calculó en un litro y medio.

El entonces subdirector de la clínica, Exequiel Fernández, consideró “inexplicable” que dado el estado crítico de Frei, recién entonces su médico tratante Silva Garín decidió trasladarlo a la UTI. Algo similar declaró la enfermera jefa, Mireya Figueroa. Entre otras confabulaciones, alguien no identificado aún en el proceso, escondió la ficha clínica del líder DC fuera del archivo de la Santa María. Ésta fue hallada a comienzos de la presente década en un altillo de la casa de Avenida Santa María 0380 “junto a documentos de contabilidad”. Según la actual jefa del Archivo General y Estadísticas de la clínica, Josefa Rial Tobio, allí funcionaba la oficina de Contabilidad y Finanzas de la Santa María. La ficha apareció “misteriosamente”, al igual que la oscura autopsia escondida por 20 años por los médicos procesados de la Universidad Católica. Sin lo relativo a la primera operación, y faltaba la última hoja sobre el deceso de Frei Montalva.

A pesar de que el ministro Alejandro Madrid procesó sólo a los médicos Patricio Silva, Pedro Valdivia, Helmar Rosenberg y Sergio González, que tuvieron participación directa en las intervenciones quirúrgicas, visitas extrañas y la autopsia practicada a Frei Montalva, alrededor suyo existió un cerco de médicos-agentes que pasaron por la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Este último organismo ha participado de forma selectiva en aquellos crímenes “sensibles” para la dictadura que requerían una acción coordinada más compleja.

Ejemplos son los asesinatos del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, ejecutado un mes después que Frei, y el químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de los acusados por Berríos es el agente civil Raúl Lillo, también procesado el lunes por Madrid. Correligionario de Lillo y aún no procesado por el caso Frei es el doctor residente en la Clínica Santa María a la fecha de la muerte del ex Mandatario, Sergio Vélez Valenzuela.

Éste reconoció en el proceso que ingresó a la DINE en 1993 y que entre 1981 y 1982 fue destinado “como capitán de sanidad” a los organismos de inteligencia.

Otro médico de la Santa María al momento del crimen de Frei sin procesar, pero que reconoce su participación en órganos de inteligencia, es Sergio Virgilo Bocaz. Éste declaró que ejerció funciones en esa clínica hasta “aproximadamente” 1981. Virgilo Bocaz declaró en el caso del cabo Manuel Leyton, asesinado en 1977 por la DINA también por envenenamiento en la Clínica London de ese servicio represor.

El ente aglutinador de estos desconocidos médicos es Pedro Valdivia, ex DINA y CNI y otro de los procesados por el juez Madrid. En su caso, las contradicciones son groseras. La verdad ayuda a sanar

Los sólidos argumentos de la resolución del juez Alejandro Madrid confirmaron una verdad que muchos sospechaban desde el día que falleció el ex Presidente Frei Montalva: la dictadura estaba detrás de su muerte.

Incluso el propio ex Mandatario lo intuyó antes y pidió que lo sacaran de allí, “inmediatamente”. Pero si era difícil creer “tanta maldad” como ha dicho su primogénito, más difícil era probarlo.

Por eso debieron pasar tantos años para que gracias a la porfía de su hija Carmen, la justicia uniera las piezas del siniestro rompecabezas hasta llegar a algunos de los ejecutores del magnicidio. Alcanzar a los autores intelectuales, es la tarea que falta, aunque igual que antes todos lo sospechan, pero hay que probarlo. Por lo mismo quienes fueron aliados del régimen militar hoy se atreven a cuestionar “sibilinamente” sólo la oportunidad del fallo, pero también están claros que “la verdad ayuda a sanar” como dijo Carmen Frei.

Los infiltrados

Según antecedentes del proceso, tanto Vélez, como Virgilo y Valdivia, trabajaban de forma “discreta” en la Clínica London al tiempo que ejercían labores en la Clínica Santa María.

Valdivia incluso reconoce que conoció a Vélez en London “y también recuerdo que hacíamos turnos en la Clínica Santa María”.

Contacto con el paciente

Fue durante los turnos médicos efectuados en este último centro hospitalario cuando Valdivia estuvo en contacto con Frei, sin poder justificar sus visitas a su habitación ni tampoco por qué no dejó registro de ellas en la ficha médica.

Desmentido a Valdivia

Sostiene Valdivia que en una ocasión realizó un “examen somero” al ex Presidente Frei Montalva debido a que tenía fiebre y “sus signos alterados”, pero que lo hizo por petición de la enfermera María Victoria Larraechea. Pero ella declaró que “nunca le solicité a Pedro Valdivia que viera a Frei, no tendría por qué haberlo hecho”.

Más contradictoria es la versión de Valdivia sobre la recepción del cuerpo de Frei Montalva recién ocurrida su muerte, lo que le correspondió hacer.

Mentiras en torno al cuerpo

A pesar de que la hoja donde se certifica el deceso desapareció, tanto el doctor Hernán Ortiz como la enfermera Silvia Zúñiga, declaran haber dejado el cuerpo en sus manos. Valdivia lo niega señalando que ese día estaba de vacaciones en Chillán, pero el juez acreditó que ese día 22 de enero de 1981, Valdivia estaba en la clínica porque le dio el alta médica a su paciente Domitila Bustos

Miércoles 9 de diciembre de 2009 El Mostrador

La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva

El 7 de diciembre de 1981, varios miristas presos en la Cárcel Pública, se envenenaron misteriosamente con botulismo, pero lograron salvar la vida gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos y la ayuda internacional que envió los antidotos. Otros reos comunes que compartían la celda, sin embargo, no tuvieron la misma suerte.

Y como si se tratara de una cábala, el ministro Alejandro Madrid, dictó en la misma fecha, pero 18 años más tarde, el auto de procesamiento en contra de seis personas como responsables, en distintas calidades, por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El vínculo entre ambos casos es el veneno. Y el guiño de Madrid es claro en este sentido. Lo anterior, debido a que en la resolución de este lunes se estableció que si bien Frei murió por un shock séptico luego de varias operaciones al estómago en la Clínica Santa María, la debilidad que presentó ante la enfermedad se debió a que le inocularon, al menos durante tres meses antes, gas mostaza y talio.

Pero la producción de venenos tiene su origen desde mediados de la década del 70 en un laboratorio de la Dina de calle Vía Naranja

en Lo Curro, donde trabajaba el químico Eugenio Berríos, quien fue asesinado en Uruguay en 1993, cuyo proceso también lo lleva Madrid y del que se espera condena prontamente.

Allí se produjo el gas sarín con el que se intentó asesinar a Orlando Letelier en Washington, aunque finalmente se prefirió una bomba que lo hizo volar por los aires en 1976.

La DINA se terminó en 1977 y su sucesora fue la CNI, pero gran parte de las toxinas y la expertiz fueron retomados por el Ejército, en algunos casos con fines estratégicos ante un eventual conflicto con los vecinos y otros con el objeto de deshacerse de los indeseables para el régimen.

El link con el caso Frei comenzó originalmente el 13 de octubre de 2000, cuando el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Burgos, recibió al entonces director de Investigaciones, Nelson Mery. Días antes la senadora Carmen Frei, en el hemicycleo del Senado, había manifestado las dudas que mantenía sobre la muerte de su padre y planteó que detrás de la misma estaba la acción de terceros ligados a los organismos de seguridad de la dictadura. De esa reunión emanó una orden para que los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, concurrieran al Instituto de Salud Pública -otrora llamado Bacteriológico- para entrevistar a una serie de especialistas, algunos de ellos que fueron compañeros de universidad con Berríos.

El documento que emanó de esa diligencia -que luego fue integrada al expediente que hoy lleva Madrid-, contiene uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente.

El informe, que fue publicado en 2002 en el libro Crimen Imperfecto, escrito por el autor de esta nota, reveló la existencia de la toxina botulínica, que el propio ISP trajo a Chile por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, recinto que funcionaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.

Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo. Durante la investigación fueron descubriéndose varios hechos al menos misteriosos. El expediente que se había iniciado por la muerte de los reos comunes en la Cárcel Pública y miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara, se había quemado en un incendio que afectó al entonces Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. También que el respirador mecánico al que mantenían con vida se había incendiado en la Posta Central sin explicación aparente.

También el doctor y uno de los líderes de la Colonia Dignidad, Hartmuth Hopp, iba regularmente al ISP a buscar ratones de laboratorio para realizar sus experimentos.

Todo apuntaba a un hecho coordinado para asesinar a los miristas y, al mismo tiempo, probar los efectos de la toxina.

Este engarce es lo que viene en el caso Frei, debido a que otros militares y civiles son los nexos necesarios para la muerte del ex mandatario.

Al analizar el auto de procesamiento que dictó el juez Madrid este lunes es posible observar las responsabilidades de cada uno de los encausados.

Raúl Lillo Gutiérrez: ex agente de la CNI, miembro de la Brigada Político Sindical que espía a la DC. Este militar (R) del Ejército fue quien reclutó a Luis Becerra, precisamente el chofer de Frei, también procesado en la causa, al igual que el primero en calidad de autor del homicidio.

Otro imputado como autor es el doctor Patricio Silva, ex subsecretario de Salud, quien estuvo en el grupo médico que operó a

Frei. Este profesional, en sus distintas declaraciones cayó en diversas contradicciones, una de ellas haber negado la aplicación de un medicamento llamado “Transfer Factor”, que ayudó al agravamiento del ex mandatario.

En calidad de cómplice está el doctor Pedro Valdivia, quien laboró en la clínica London de la DINA y después en la CNI. Al mismo tiempo, también está encausado en el proceso, que también lleva Madrid, referido al homicidio del ex agente Manuel Leyton Robles. Básicamente, Valdivia negó haber estado a cargo del cuerpo de Frei antes de ser entregado para la autopsia, señalando que no estaba en la clínica aquel 22 de enero de 1982, sino con sus familiares fuera de Santiago.

Sin embargo, el ministro halló un testigo que aseguró que la operó y él mismo la dio de alta en la fecha señalada.

Por último, en calidad de encubridores, están los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González. Su participación en el caso consistió en realizar la cuestionada autopsia a Frei. La misma que estuvo escondida durante 20 años en el archivo de esa casa de estudios bajo el rotulo NN.

Cuando el ministro la encontró, incluso había sido adulterada.

Miércoles 9 de diciembre de 2009 El Mostrador Tres testigos declararon en Roma contra fiscal militar Podlech

Tres testigos declararon este miércoles en la tercera audiencia del primer juicio por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en 1973, cuya responsabilidad fue supuestamente del ex fiscal militar durante la dictadura Alfonso Podlech Michaud.

Lautaro Calfuquir, de origen mapuche y que fue compañero de Venturelli en la cárcel de Temuco, declaró ante el tribunal que el ex sacerdote salió del recinto a las seis de la tarde del día 4 de octubre de 1973, “una mala señal porque los que eran sacados a esa hora siempre eran torturados o desaparecían”, dijo.

“Venturelli nunca regresó”, subrayó Calfuquir quien por su parte, fue torturado “con golpes clásicos y picaduras de corriente, aunque no me tocaron la cara”.

Otro testigo, Paolo Berzhenko, que entonces era profesor de Historia en la Universidad Católica de Temuco, relató al tribunal que se encontró a Venturelli en la Fiscalía Militar, donde se realizaban los interrogatorios y los consejos de guerra, y cuyo fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

Según Berzhenko, “Venturelli fue interrogado allí, pero se le hizo desaparecer antes y nunca fue juzgado”.

Por último, Eleuterio Toro, profesor de Matemáticas en la Universidad Católica de Temuco, explicó de qué forma se llevaba a cabo la represión en esa localidad.

Detalló el origen italiano de Venturelli, dijo conocer a su familia, a sus padres, que vivía en la colonia italiana “Capital Pastene”, señaló.

El sistema judicial italiano contempla que el juicio pueda realizarse “por derecho de sangre”, lo que implica el inicio de procesos por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de Italia.

En la audiencia anterior del pasado 18 de noviembre, los jueces italianos dictaminaron la negación de la custodia fuera de la cárcel romana donde ahora se encuentra Alfonso Podlech Michaud.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973-1990), entre ellos el ex

religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.

Podlech Michaud, de 75 años, fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades italianas y, el 13 de agosto el ex fiscal militar fue extraditado a Italia desde España y encarcelado en la prisión de Rebibbia (Roma).

Durante la dictadura, cuatro ciudadanos italo-chilenos desaparecieron: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

En julio de 2006, la familia del ex sacerdote presentó en Chile una querrela contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese año, y contra Podlech, quien ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Omar Venturelli Leonelli, ex cura que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento “Tucapel”, de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro.

Un documento firmado por Alfonso Podlech señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

Martes 15 de diciembre de 2009 La Nación Suprema confirma sentencias por secuestro de mirista

La Corte Suprema dictó este martes nuevas sentencias en contra de los integrantes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a raíz de la investigación instruida por el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez, ocurrido en noviembre de 1974.

Los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal, en fallo dividido acogieron, las condenas establecidas tras la indagatoria del ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar.

Según consta en el fallo se condenó al general y otrora líder del organismo represor de la dictadura militar, general (r) Manuel Contreras, a la pena de tres años de presidio, pero se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena; en tanto el coronel en retiro Marcelo Morel Brito y el teniente coronel Ricardo Lawrence fueron condenados también a tres años de cárcel con el beneficio de la remisión condicional.

Martes 15 de diciembre de 2009 La Nación “Becerra hizo lo necesario para que mataran a Frei Montalva”

“Luis Becerra no mató a Eduardo Frei Montalva, pero hizo lo necesario para que lo mataran”, dijo el abogado de la familia Frei Ruiz-Tagle, Álvaro Varela, ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la revisión del recurso de amparo presentado por la defensa del ex chofer del líder de la DC. El tribunal de alzada debe emitir hoy su resolución acerca de amparo interpuesto.

La Octava Sala de esa Corte escuchó ayer los primeros argumentos de las partes por los cuales se pone ahora a prueba la resolución dictada el pasado lunes 7 de diciembre por el juez Alejandro Madrid, procesando a seis personas entre médicos y ex agentes de inteligencia por el homicidio por envenenamiento del líder demócratacristiano.

La tesis principal del abogado Varela en este caso para convencer a los tres magistrados que integran la sala de lo ajustado a derecho del dictamen del juez Madrid, es que Becerra espió por un largo tiempo las actividades de Frei Montalva desde mucho antes de su muerte, que esa información la traspasaba a los agentes de inteligencia, que con esta información el ex dictador Augusto Pinochet estaba a diario enterado de todos sus movimientos considerando a Frei como un personaje peligroso para el régimen, pero sobre todo que “lo que es más determinante, es que Becerra no advirtió nunca a la víctima” acerca del peligro que se cernía sobre él.

“El resultado de su muerte se puede atribuir a la inactividad de Luis Becerra, porque éste facilita los medios para el crimen”, dijo Varela a los jueces, agregando que en el caso de la defensa de Becerra representada ayer por el abogado Carlos Failier, “no esgrime fundamentos, salvo señalar que su defendido no tuvo participación en los hechos que se le imputan”.

La defensa de Becerra manifestó a los magistrados que su defendido inició sus contactos con la CNI como informante sólo después de la muerte del ex Mandatario, y que la información que éste entregaba al organismo represivo tenía que ver exclusivamente con las actividades del Partido Demócrata Cristiano, y no con la vida de Frei Montalva y sus movimientos. Sin embargo, Varela expresó que en la investigación judicial está establecido que Becerra se hizo informante antes del 22 de enero de 1982, día de la muerte, y que él no era un militante de alta jerarquía para estar en conocimiento de los antecedentes partidarios que podría interesar a la inteligencia militar. Más aún, teniendo en cuenta de que a Becerra se le pagaban como informante 50 mil pesos mensuales, lo que para la época no era poco dinero por lo que la CNI no iba a estar invirtiendo dinero en él para recibir asuntos de poca importancia.

“Luis Becerra es uno de los autores del crimen de don Eduardo Frei Montalva que actuó detrás del autor que lo envenenó”, sostuvo Varela.

A la vez, el abogado hizo a los jueces una extensa relación de las múltiples declaraciones de los ex agentes en el proceso, en las cuales éstos reconocen los contactos con Luis Becerra, quien incluso siendo un informante pagado, recibió en casa del ex Presidente a las visitas que tras su deceso llegaron para presentar las condolencias a su familia

Otro argumento aportado por el abogado Varela fue que antes de que se decidiera que había que dar muerte al Presidente, Augusto Pinochet estuvo siempre informado a diario por el director de la CNI acerca de las actividades suyas, dada la importancia que el régimen opresor asignaba a Frei Montalva considerándolo una figura peligrosa por el liderazgo que había asumido en la oposición.

Pericias realizadas a los restos del Mandatario arrojaron presencia de talio y compuestos del gas mostaza, los que le fueron inyectados en tres oportunidades por vía intravenosa

Martes 15 de diciembre de 2009 El Mostrador Revelan misteriosa toma de sangre al ex Presidente entregada por Patricio Rojas

Un suboficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) preparó en diciembre 1981 la habitación donde sería operado, antes de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fuera operado en la Clínica Santa María, donde falleció en enero del año siguiente. Se trata de José Espinoza Espinoza, una de cuyas hija trabajó con el doctor Patricio Silva (procesado como autor en la

causa) en el Hospital Militar, mientras que la otra lo hizo en la misma especialidad que su padre en esa rama castrense.

La información la dio a conocer el abogado Álvaro Varela, querellante de la familia Frei, durante los alegatos que se realizaron esta mañana, por el amparo presentado por el ex agente de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, que busca revocar el procesamiento como autor del homicidio del ex Mandatario, que dictó el ministro Alejandro Madrid.

Según Varela, Espinoza no fue el único ex militar que llegó a trabajar a la Clínica Santa María, sino que al menos 8 personas en calidad de mayordomos y auxiliares, de acuerdo a la declaración del propio director del centro asistencial Enrique Duval.

De hecho, fue el propio Espinoza quien trasladó a Frei en su camilla desde un lugar a otro de la clínica, según Varela, lo que a su juicio constituye una presunción que completa la convicción de que Frei fue asesinado por los organismos de seguridad del régimen.

Rojas, again

En tanto, una misteriosa toma de sangre hecha al fallecido ex Presidente Eduardo Frei Montalva es uno de las revelaciones que aparecieron también en los alegatos de ayer. Básicamente, implica al ex ministro de Defensa de Aylwin, Patricio Rojas.

Se trata de un episodio, ocurrido con la enfermera Clara Retamal, a quien Rojas le lleva una muestra de sangre para que la analizara el real estado de salud del ex Mandatario cuando estaba internado grave en la Clínica Santa María, pese a que no era especialista en la materia.

Varela dejó entrever que dicha muestra no tuvo una “cadena de custodia” y aseguró que no había claridad de quién la tomó y que Rojas tampoco dio una explicación satisfactoria al ministro Madrid cuando fue inquirido al respecto.

Fondo y forma

Esta mañana alegaron por el ex CNI Lillo, el abogado Jorge Balmaceda, quien aseguró que su cliente era inocente de los cargos que se le imputan, ya que no estaba probada su participación en los hechos.

Otro argumento lo entregó también el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Quintana. Este último, apuntó a las razones de fondo por las que deben ser rechazado el amparo contra Lillo, debido a que se trata del asesinato a un ex Presidente y que hasta ahora las pruebas son suficientes para mantener encausados a los presuntos responsables.

Actualmente, los procesados en calidad de autores son el ex chofer de Frei Luis Becerra, el ex CNI Raúl Lillo y el médico Patricio Silva; como cómplice el ex médico de la DINA Pedro Valdívila; y en calidad de encubridores los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González